

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danipt623@yahoo.es fernandp23@yahoo.es
3218172984 3218172984
ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

Popayán, 22 de febrero de 2024

Doctora
BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA
Magistrada
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección “A”
Correo electrónico;

RADICACIÓN: 25 - 000 – 23 – 36 - 000 – 2023 – 00 – 276 - 00
DEMANDANTE: INCUBADORA SANTANDER S.A.
DEMANDADOS: NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, NACIÓN - MINISTERIO
DEL INTERIOR, NACIÓN – MINISTERIO DEL TRANSPORTE
Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

Cordial saludo:

DANILO PARRA TOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 10543558 expedida en Popayán, Abogado Titulado, Inscrito y en Ejercicio, Portador de la Tarjeta Profesional No. 63227 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial del Municipio de Villa Rica Cauca, representado legalmente por la doctora **MARÍA EDIS DINAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 25669715 expedida en Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, en su calidad de Alcalde de la Entidad Territorial, con toda consideración me dirijo a su despacho, con el fin de **CONTESTAR**, dentro de los términos legales, la **DEMANDA, MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA** impetrada por **INCUBADORA SANTANDER S.A.**, en contra de la **NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, NACIÓN – MINISTERIO DEL TRANSPORTE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS**, en los siguientes términos:

I. OPORTUNIDAD QUE TIENEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA Y DEMÁS ACTUACIONES QUE SE SURTAN

Para hacer el análisis correspondiente, esto es en cuanto al término de que disponen las entidades públicas para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, etc., es preciso remitirnos a las normas que para el efecto ha consagrado el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 y demás normas que la adiciones o complementen.

En efecto, las normas que atemperan a lo deprecado anteriormente, son las siguientes:

Artículo 199 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2020, mediante mensaje de datos dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales.

En efecto se dispone:

Artículo 48: Modifíquese el artículo 199 de la ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que refiere el artículo 197 de este código.

A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en éste.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. Al Ministerio Público deberá anexársele copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.

En los procesos en que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2º del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se remitirá copia de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias.

Una vez surtidos los dos (2) días de la notificación, a partir del día siguiente empezarán a correr el término de 30 días para contestar la demanda, de conformidad con el artículo 172 de la ley 1437 de 2011.

Artículo 172. Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención. (En Negrilla y Subrayado Fuera de Texto).

Artículo 197. Dirección electrónica para efectos de notificaciones. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

Para los efectos de este Código se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

Artículo 198. Procedencia de la Notificación Personal. Deberán notificarse personalmente las siguientes providencias:

1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado.

4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal.

En el caso sub examine, es claro entonces, que la notificación personal dirigida al Municipio de Villa Rica: oficinajuridica@villarica-cauca.gov.co, se realizó en fecha martes diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Una vez surtidos los dos (2) días hábiles de la notificación, contados a partir del día siguiente, esto es, los días 11 y 12 de enero de 2024, empezarán a correr el término de 30 días para contestar la demanda, esto es, a partir del día 15 de enero cursante y hasta el día veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), en consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal para presentar el escrito de la contestación de la demanda, ora proponer excepciones, ora solicitar pruebas, ora llamar en garantía, e in fine, para presentar demanda de reconvención.

Ahora bien, en el caso sub litis, es preciso manifestar que el buzón de correo electrónico exclusivamente para notificaciones judiciales del Municipio de Villa Rica, Cauca, es: contactenos@villarica-cauca.gov.co.

II. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

1. **Parte Demandante:** La integra:

INCUBADORA SANTANDER S.A. Sociedad por Acciones constituida en Colombia, identificada con el NIT. No. 890.200.474-5 y matriculada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, representada legalmente por el señor JUAN FELIPE MONTOYA MUÑOZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.281.692.

Dirección para recibir notificaciones: Carrera 15 No. 8-50 Acceso 3, piso 10 Torre Empresarial Delacuesta en Piedecuesta – Santander,

Dirección Electrónica: notificaciones@kikes.com.co.

2. **Apoderado de la Parte Demandante:** Funge como Apoderado Judicial de la parte demandante, el doctor **ALBERTO YEPES BARREIRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.145.017 y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 29.629 del C. S. de la Judicatura.

Dirección Notificaciones: Carrera 9 No. 81A – 26, Oficina 303, en la ciudad de Bogotá D.C.

Dirección Electrónica ayepesb10@gmail.com.

3. **Parte Demandada:** Está integrada por:

NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE):

Organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1784 de 2019 -por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República estará a cargo del Jefe de Gabinete y del Director del Departamento quien ejercerá la representación legal del Departamento, en los términos del artículo 65 de la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones que regulan la materia. En

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

la actualidad, la representación legal del DAPRE la ostenta el Dr. Carlos Ramón González, Jefe de Gabinete, o quien haga sus veces.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:

Organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, y cuya dirección corresponde al actual Ministro de Defensa, Dr. Iván Velásquez Gómez, o quien haga sus veces. POLICÍA NACIONAL: organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, dirigida por el Gral. William René Salamanca, y cuya representación corresponde al Ministerio de Defensa en cabeza del Dr. Iván Velásquez Gómez, o quien haga sus veces.

EJÉRCITO NACIONAL:

Organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de 3 conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, dirigida por el Gral. Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, y cuya representación corresponde al Ministerio de Defensa en cabeza del Dr. Iván Velásquez Gómez, o quien haga sus veces.

MINISTERIO DEL INTERIOR:

Organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, y cuya dirección corresponde al actual Ministro del Interior, Dr. Luis Fernando Velasco Chaves, o quien haga sus veces.

MINISTERIO DE TRANSPORTE:

Organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, y cuya dirección corresponde al actual Ministro de Transporte, Dr. William Camargo Triana, o quien haga sus veces.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL:

Organismo del sector central de la Administración Pública, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, y cuya dirección corresponde la actual Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Dra. Jhenifer Mojica Flórez, o quien haga sus veces.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política, por la Gobernadora del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro Torres, o por quien haga sus veces.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA:

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política, por el Gobernador del Cauca, doctor Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, o por quien haga sus veces.

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI:

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por el Alcalde Municipal, doctor Alejandro Eder Garcés, o por quien haga sus veces.

DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA:

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por el Alcalde Distrital, señor Víctor Hugo Vidal Piedrahita, o por quien haga sus veces. 4 MUNICIPIO DE BUGA (V): entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por la Alcaldesa Municipal, doctora Ligia del Carmen Córdoba Martínez, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ (V):

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por la Alcaldesa Municipal, señor Paola Andrea Castillo Gutiérrez, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE DAGUA (V)

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por la Alcaldesa Municipal, doctora Karol Villarejo, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE RESTREPO (V)

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por el Alcalde Municipal, señor Luis Edilmer Ortega Meneses, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE YOTOCO (V):

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por el Alcalde Municipal, señor Luis Mario Valens Bedoya, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE CALOTO (C):

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por el Alcalde Municipal, señor Oscar Hernán Cifuentes Cifuentes, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE GUACHENÉ (C)

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por el Alcalde Municipal, señor Wilinton Mina Vidal, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA (C):

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por la Alcaldesa Municipal, doctora Luz Adiel Salazar Gómez, o por quien haga sus veces.

MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA:

Entidad de derecho público representada legalmente, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, por la Alcaldesa Municipal, doctora María Edis Dinás,

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

identificada con cédula de ciudadanía No. 25669715 expedida en Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, o por quien haga sus veces.

Dirección: Calle 2 No. 1 – 187, Villa Rica Cauca

Teléfonos: 8486212 – 8486477

Correo Institucional: contáctenos@villarica-cauca.gov.co

Correo de Notificaciones Judiciales: oficinajuridica@villarica-cauca.gov.co

Apoderado de la Parte Demandada: Funge como Apoderado Judicial del Municipio De Villa Rica Cauca:

DANILO PARRA TOBAR, identificado con cédula de ciudadanía número 10543558, expedida en Popayán, Abogado Titulado, Inscrito y en Ejercicio, Portador de la Tarjeta Profesional Número 63.227 del Consejo Superior de la Judicatura,

Domicilio: Calle 1ª No. 7 – 14, Oficina 211, Edificio El Prado de la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca.

Celular No. 3218172984.

EMAIL: danip623@yahoo.es

4. **PARTE VINCULADA:** Está integrada por:

- **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO**, quienes pueden ser notificados en la Calle 16 No. 68d-89, de Bogotá D.C., Teléfono Conmutador: (57) 601 255 89 55, Fax 601 255 89 33.

Correo Electrónico: conciliacionesnacionales@defensajuridica.gov.co
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

- **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, quien puede ser notificado al correo electrónico institucional del Agente del Ministerio Público asignado al Despacho Judicial Respectivo.

III. FRENTE A LOS HECHOS RELEVANTES GENERALES

AL PUNTO PRIMERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SEGUNDO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TERCERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

AL PUNTO QUINTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SEXTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SÉPTIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCTAVO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO PRIMERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO SEGUNDO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DECIMO TERCERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO CUARTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO QUINTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO SEXTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

(Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO OCTAVO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO DÉCIMO NOVENO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO TERCERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO CUARTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO QUINTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO SEXTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

AL PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO VIGÉSIMO NOVENO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SEGUNDO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO TERCERO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO CUARTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO QUINTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO SEXTO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO OCTAVO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO TRIGÉSIMO NOVENO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y UNO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y DOS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y TRES. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y CUATRO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y CINCO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y SEIS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y SIETE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y OCHO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CUARENTA Y NUEVE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

(Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y UNO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y DOS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y TRES. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y CUATRO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENA Y CINCO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y SEIS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y SIETE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y OCHO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO CINCUENTA Y NUEVE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y UNO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danipt623@yahoo.es fernanp23@yahoo.es
3218172984 3218172984

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

AL PUNTO SESENTA Y DOS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y TRES. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y CUATRO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y CINCO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y SEIS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

HECHOS RELEVANTES ESPECÍFICOS RESPECTO A LA INCUBADORA **SANTANDER S.A.**

AL PUNTO SESENTA Y SIETE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y OCHO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SESENTA Y NUEVE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y UNO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y DOS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

AL PUNTO SETENTA Y TRES. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y CUATRO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y CINCO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y SEIS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y SIETE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y OCHO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO SETENTA Y NUEVE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y UNO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y DOS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y TRES. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y CUATRO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

AL PUNTO OCHENTA Y CINCO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y SEIS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y SIETE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y OCHO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO OCHENTA Y NUEVE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y UNO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y DOS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y TRES. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y CUATRO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y CINCO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y SEIS. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danipt623@yahoo.es fernanp23@yahoo.es
 3218172984 3218172984

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

AL PUNTO NOVENTA Y SIETE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y OCHO. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

AL PUNTO NOVENTA Y NUEVE. No me consta. Que se pruebe dentro del trámite procesal correspondiente. La carga de la prueba corresponde por órbita funcional a quien afirma (Onus probandi incumbit actore), en este caso, a la parte actora, previo aporte de pruebas idóneas y conducentes que le den la razón a su dicho.

III. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte demandante, por ser a todas luces improcedentes desde el punto de vista legal y fáctico, como se demostrará en este escrito y durante el trámite de este proceso.

De manera especial solicito, a la Señora Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, se libere al Municipio de Villa Rica Cauca de toda responsabilidad en los hechos materia de este instructivo, por cuanto la entidad que represento no tuvo que ver en lo absoluto con los posibles perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante ocasionados a la Incubadora Santander S.A., en virtud de que no se evidencia ningún tipo de responsabilidad administrativa y patrimonial que comprometa al Municipio de Villa Rica Cauca.

En el presente caso, no se ha estructurado la denominada responsabilidad administrativa, pues no existe, para el efecto, prueba legalmente producida en grado de certeza, elementos materiales probatorios e in fine evidencias físicas que demuestren que el Municipio de Villa Rica Cauca incurrió en falla en el servicio por las pérdidas económicas e indemnizaciones solicitadas por la parte actora.

En conclusión, el Municipio de Villa Rica Cauca se opone a todas y cada una de las pretensiones alegadas por la parte demandante, por tanto, solicito, Señora Magistrada, se absuelva a la Entidad que represento de las declaraciones y condenas pretendidas por el apoderado de la parte actora, pues las considero infundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico al no tener valor probatorio alguno, razón por la cual solicito se sirva denegarlas, toda vez que frente al asunto objeto de demanda concurren en favor de la entidad que represento la excepción perentoria, dilatoria, innominada o de fondo, de falta de legitimación material en la causa por pasiva, por cuanto, el Ente Gubernamental no participó, directa ni indirectamente en los hechos que dan lugar a la presente demanda, aparte de ello la Entidad Territorial no es autoridad competente para ser vinculada al proceso, en tanto que, la funcional de adoptar las medidas necesarias tendiente a prevenir, controlar o mitigar las alteraciones de orden público y garantizar la movilidad de la población civil, corresponde al Estado, lo que indica que es responsabilidad absoluta del Presidente de la República en su triple condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Primera Autoridad Administrativa, que como era su deber, asumió el control absoluto del orden público, en atención a la Sentencia C-069 de fecha 19 de febrero de 2020, por tanto, las autoridades regionales y locales están supeditados a las directrices que trazaba el Presidente de la República, en consecuencia, la competencia funcional de adoptar las medidas necesarias, tendiente a prevenir, controlar o mitigar las alteraciones de orden público y garantizar la movilidad de la población civil es competencia exclusiva y excluyente de la primera autoridad de la Nación.

V. A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Las normas mencionadas corresponden al hecho antijurídico (responsabilidad administrativa) de que habla el Artículo 90 de la Norma Normarum, pero que de ninguna manera son aplicables al caso sub lite, ya que no puede derivarse ningún tipo de responsabilidad al **MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA**, cuando no hay soportes fácticos para hacerlo. Además, las normas que cita el actor del proceso en la parte pertinente de la demanda no son aplicables por cuanto para que se configure la responsabilidad administrativa de la entidad, se requiere de la confluencia de los siguientes elementos:

- a) Una falla o falta en el servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio.
- b) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho.
- c) Una relación de causalidad entre la falta o falla en el servicio de la administración y el daño causado.

En el caso puesto bajo examen, no se presenta ni el primer elemento (falla o falta en el servicio) ni el tercero (relación de causalidad de aquella con el daño causado al tercero). Precisamente, la falta del nexo causal obedece a que el presunto hecho se presentó, no como consecuencia de la falla en el servicio del Municipio de Villa Rica Cauca, sino como consecuencia de una posible negligencia por parte del Estado.

Es claro, entonces, que en el presente caso no existe falta o falla en el servicio por parte de la administración municipal de Villa Rica Cauca ni por vía de acción ni por vía de omisión, en la producción del daño causado a la Incubadora Santander S.A., menos aún se ha logrado probar el nexo de causalidad que vincula el hecho generador con la producción del daño, ya que dicha actuación no se debió a la Entidad Territorial que estoy representando, sino al parecer, según los hechos relatados en la demanda por otras autoridades del Estado, en el entendido de que se deberá analizar la posible responsabilidad del Estado, que tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias, tendiente a prevenir, controlar o mitigar las alteraciones de orden público y garantizar la movilidad de la población civil.

VI. EN CUANTO A LA INDICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL

No me opongo a que se tenga ese medio de control, pero será el Juez que le dé valor probatorio al mismo.

VII. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LOS SOPORTES DOCUMENTALES APORTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE

No me opongo a que se tengan como tales los documentos aportados por la parte demandante, pero será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien le dé el valor que le corresponde a cada medio probatorio, siguiendo para el efecto los principios de la sana crítica y la persuasión racional de la prueba.

En el caso sub. lite, es claro, entonces, que los medios de prueba aportados por la parte actora como sustento de su demanda, no hacen más que ratificar que no hay elementos de juicio que permita inferir que el Municipio de Villa Rica Cauca tuvo algún grado de responsabilidad en los posibles daños y perjuicios ocasionados a la empresa Incubadora Santander S.A. A contrario sensu, el plexo probatorio aportado al sumario de la referencia es claro y preciso en afirmar que la Entidad Territorial es ajena a cualquier responsabilidad objetiva – falla en el servicio – que se hubiere presentado con ocasión de los hechos deprecados en el libelo demandatorio.

VIII. A COMPETENCIA Y CUANTÍA

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

Me opongo a que se declare que el Municipio de Villa Rica Cauca es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la parte actora de este proceso, por no caberle responsabilidad por ninguno de los hechos acaecidos. Me opongo igualmente a que le condene al pago de perjuicios materiales, morales y daño a la salud que se han solicitado en el líbello de la demanda.

Por la naturaleza de la acción, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, es competente para conocer de esta acción.

IX. RAZONES DE DEFENSA FRENTE AL LIBELO DEMANDATORIO

Que en el presente caso no se ha estructurado la denominada responsabilidad administrativa, pues no existe, para el efecto, prueba legalmente producida en grado de certeza, elementos materiales probatorios e in fine evidencias físicas que demuestren que el Municipio de Villa Rica Cauca incurrió en falla en el servicio por las posibles pérdidas económicas en que pudo haber incurrido la Incubadora Santander S.A., por ello es válido sostener que desde el punto de vista estrictamente jurídico no hubo, en el caso sub judice, **NEGLIGENCIA, IMPERICIA, DESIDIA O CULPA**, de la Administración Municipal de Villa Rica Cauca en los hechos objeto de esta acción y que permitan hablar de responsabilidad con obligación de indemnizar a la parte afectada por haber obedecido a falla en el servicio a cargo de la entidad, aplicando para el efecto la **TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA POR FALLA EN EL SERVICIO**.

En el caso sub lite, tenemos que para que se pueda endilgar responsabilidad administrativa se requiere la concurrencia de dos presupuestos: (I) la existencia de un daño antijurídico y (II) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de imputación de responsabilidad establecidos jurisprudencialmente por el Consejo de Estado, a saber, la falla en el servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc.

Según lo expuesto, debe probarse la existencia del daño antijurídico como requisito sine qua non de responsabilidad estatal, en virtud de que si no se logra probar este elemento no habría lugar, iure et de iure, al reconocimiento de los daños y perjuicios pretendidos por la parte actora.

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:

“El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar dos componente: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”; o la lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”; y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general

En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuricidad del perjuicio no depende de la ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”. Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que el Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”.

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuentra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art, 1º) y la igualdad (Art. 13) y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, previstas en los artículos 2 y 58 de la Constitución”.

De conformidad con lo expuesto no puede derivarse ningún tipo de responsabilidad al **MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA**, cuando no hay soportes fácticos para hacerlo en la medida en que para que se configure la responsabilidad administrativa de la entidad, se requiere de la confluencia de los siguientes elementos:

- a) Una falla o falta en el servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio.
- b) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho.
- c) Una relación de causalidad entre la falta o falla en el servicio de la administración y el daño causado.

En el caso puesto bajo examen, no se presenta ni el primer elemento (falla o falta en el servicio) ni el tercero (relación de causalidad de aquella con el daño causado al tercero. Precisamente, la falta del nexo causal obedece a que el presunto hecho se presentó, no como consecuencia de la falla en el servicio del Municipio de Villa Rica Cauca, sino como una negligencia, impericia, deber de cuidado del propio Estado, quien asumió el control absoluto del orden público y en este sentido los Burgomaestres Regionales y Locales estaban supeditados a las directrices del Gobierno Nacional, tal como aconteció con la expedición del Decreto 575 de fecha 28 de mayo de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, en virtud del cual el Presidente de la República dio inicio a la asistencia militar previsto en el Artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, aunque posteriormente el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta encontró que ese Acto Administrativo amenazaba el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores de orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares. Expuso que si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave del orden público, lo cierto es que, en esos casos, lo que resulta admisible, y con criterios de necesidad y proporcionalidad es el uso de la fuerza policial mas no militar.

Para sustentar la decisión, la Sección Cuarta, advirtió que en la Sentencia C-281 de 2017, la Corte Constitucional determinó que “la protesta social, por si sola, no representa una amenaza contra el orden constitucional ni contra la soberanía nacional. Por el contrario, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por las autoridades”

A juicio de la Sala, los motivos que respaldan la activación de la asistencia militar responden a operativos de control y contención de las movilizaciones sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, intervención militar que fue declarada inconstitucional en la Sentencia C-281 de 2017, por desconocer justamente la separación orgánica y funcional entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Conforme lo expuesto, el Consejo de Estado ordenó la suspensión transitoria del acto administrativo mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si se ajusta o no a derecho.

Aparte de ello, el Gobierno Nacional en fecha 20 de mayo de 2021 instaló la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la protesta nacional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
 DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danipt623@yahoo.es fernanp23@yahoo.es
 3218172984 3218172984

ABOGADOS
 ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
 CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
 TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
 POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
 CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
 SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.

En fecha 24 de mayo de 2021, en el marco del diálogo nacional, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro lograron un “Preacuerdo” centrado en las garantías para la protesta social. Entre los elementos discutidos en el marco del preacuerdo estaban: La necesidad de limitar la intervención militar en la gestión de la protesta, el respeto de las obligaciones internacionales sobre el uso de la fuerza, el papel del ESMAD durante el desarrollo y control de la protesta social; las expresiones públicas del Gobierno Nacional frente a la protesta y las personas manifestantes; el rechazo al uso de la violencia y la necesidad de levantar los bloqueos que impiden la realización de otros derechos.

En fecha 28 de mayo de 2021, cuando se conmemoraba un mes del inicio del Paro, el Nacional expidió el Decreto 575 de 2021, mediante el cual ordena a los Gobernadores y Alcaldes “coordinar con las autoridades militares y policía del departamento la asistencia militar... de manera que el departamento, el distrito y los municipios pongan en ejecución el Decreto para afrontar y superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y convivencia”, así como “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la Fuerza Pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos.

Como se puede apreciar, el Gobierno Nacional asumió el control total del orden público y era el que daba instrucciones a las autoridades regionales y locales, entre otras, a través del Decreto 575 de 2021, aunque es menester mencionar que el 21 de octubre de 2021 ante el Recurso de Impugnación interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior y Defensa, el Consejo de Estado en segunda instancia consideró que la acción de tutela era improcedente al no determinar con precisión cómo la asistencia militar que habilita el Decreto 575 podría llegar a afectar sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado además consideró que los accionantes contaban con otros mecanismos jurídicos para la defensa de sus derechos como la acción de nulidad.

De conformidad con lo expuesto, consideramos que tanto el Gobernador como los Alcaldes Distritales y Municipales en hechos acaecidos producto del Paro Nacional de 2021, estaban supeditados y subordinados a las directrices del Gobierno Nacional que asumió el control total y absoluto del orden público por grave afectación del mismo, tal como se hizo hincapié en párrafos que anteceden pero también por lo expuesto por el Apoderado de la parte convocante cuando expresa:

“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las competencias de los alcaldes para el mantenimiento del orden público son amplias, pero se encuentran subordinadas a las directrices que, en la materia, expidan los gobernadores y, en últimas, el Presidente de la República. Así, es dable sostener que, no obstante que los alcaldes, como autoridades propias y no designadas, se encuentran en el centro de la autonomía territorial (artículo 287 de la Constitución), en materia de policía administrativa no actúan como autoridades autónomas, sino como agentes jerarquizados o subordinados, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución.¹²⁴ Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-204 de 2019, aclaró en relación con la función de mantenimiento del orden público en cabeza de los alcaldes, lo siguiente: **□ Para el mantenimiento del orden público, los alcaldes, reconocidos por el artículo 315 de la Constitución, como la primera autoridad de policía en su municipio, detentan (sic) el poder de policía, mediante el cual expiden reglamentaciones generales de las** 124 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-204 de 2019. **62 libertades, por ejemplo, la libertad de circulación o el ejercicio de las libertades económicas (restricciones de circulación, horarios de funcionamiento, zonas de parqueo, sentido de las vías, etc.) . También, en ejercicio de la función de policía, los alcaldes expiden licencias o permisos, por ejemplo, de ocupación del espacio público e imponen medidas protectoras y sanciones por los comportamientos contrarios al orden**

público. Finalmente, dirigen la actividad de la Policía en su correspondiente municipio y, por lo tanto, bajo su orden, se realizan operativos policiales para verificar el cumplimiento de las normas de convivencia, en pro de la seguridad y tranquilidad públicas y la sanidad medioambiental. De esta manera, las competencias de los alcaldes para el mantenimiento del orden público son amplias, pero se encuentran subordinadas a las directrices que, en la materia, expidan los gobernadores y, en últimas, el Presidente de la República. (Negrilla y subrayas fuera del texto original).

En Sentencia C - 069 de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte (2020), con Ponencia de la Magistrada, doctora Cristina Pardo Schlesinger, la Corte Constitucional consideró:

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. INTEGRACIÓN:

“El encabezado del artículo 189 de la Constitución establece que el Presidente es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa y en los 28 numerales siguientes le atribuye una serie de funciones en virtud de cada una de sus 3 calidades. Este artículo tiene consecuencias respecto de las posibilidades legislativas de estructuración orgánica de la rama ejecutiva del poder público, y de atribución y distribución de funciones a su interior. La consecuencia para la estructura del ejecutivo consiste en que esta rama está organizada de manera jerárquica y que el Presidente se encuentra en la cabeza de dicha jerarquía. El resto de la rama ejecutiva del orden nacional está subordinada a sus decisiones. Finalmente, por su parte, el artículo 189 le atribuye una serie de funciones al Presidente de la República en su triple calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Este puede delegar algunas de ellas entre los funcionarios y entidades de la rama ejecutiva, y el legislador puede desconcentrar otras.”

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO – Ordenes con prelación sobre los alcaldes y gobernadores.

“Esta jerarquía constitucional implica, desde el punto de vista funcional, que al Presidente, le corresponde tomar las decisiones necesarias para el mantenimiento del orden público. Por una parte, la unidad de mando le impone límites a las actuaciones de los gobernadores y alcaldes quienes dirigen el orden público en sus respectivas órdenes territoriales, así como a los demás funcionarios de la rama ejecutiva, tanto a nivel territorial como en el nacional. Ni unos ni otros pueden desobedecer las órdenes o instrucciones impartidas por el Presidente.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA – Límites a su potestad para regular el orden público.

(...) La estructura jerárquica de dicha rama en materia de orden público le impone límites a las facultades que tiene el Congreso para regular la materia. El primer límite a la actividad legislativa consiste en que la ley debe mantener la facultad para tomar decisiones en materia de orden público en cabeza del Presidente. De lo contrario, si la ley limita o restringe la facultad del Presidente para tomar decisiones, condicionándola a la voluntad de otro funcionario, el Presidente dejaría de ser quien dirige el orden público. La dirección de cualquier sector de la política pública requiere, en primera medida, tener la facultad para tomar decisiones, y en segunda medida, el deber de obediencia por parte de sus subalternos. Por lo tanto, el legislador no podrá, por ejemplo, limitar las facultades presidenciales en el manejo del orden público, condicionándolas a unos requisitos o condiciones establecidas por los gobernadores y alcaldes. Una norma semejante subvertiría la jerarquía constitucional respecto del mantenimiento del orden público.

DIÁLOGOS DE PAZ. Potestad Presidencial.

(...) es necesario concluir que, si ninguna autoridad pública puede conducir diálogos de paz sin autorización del presidente, a fortiori tales autoridades, al estar sujeto a las órdenes del Presidente en la materia, tampoco puedan condicionar la potestad presidencial para decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo tales diálogos. Estas decisiones son de naturaleza eminentemente política, y por lo tanto es el Presidente, como representante de la unidad nacional y elegido mediante voto popular, quien debe tomarlas.

Así las cosas, diríamos, entonces, que se debe exonerar de cualquier tipo de responsabilidad administrativa y patrimonial a la Entidad Territorial, en primer lugar porque había una falta de legitimación en la causa por pasiva, el Municipio de Villa Rica Cauca no es sujeto de este proceso ya que no intervino en lo absoluto en los hechos objetos de este litis, pero también porque no habría lugar, per se, al reconocimiento de daños por no existir nexo causal que vincule el hecho generador con la producción del daño, sin obviar que la actividad determinante para la producción del daño causado a la parte actora es responsabilidad absoluta del Presidente de la República en su triple condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Primera Autoridad Administrativa, en tanto que como era su deber, asumió el control absoluto del orden público, en atención a la Sentencia C-069 de fecha 19 de febrero de 2020, por tanto, las autoridades regionales y locales están supeditados a las directrices que trazaba el Presidente de la República.

X. EXCEPCIONES DE MÉRITO, DILATORIAS, INNOMINADAS, SUSTANCIALES O DE FONDO

1. FALTA DE LEGITIMIDAD MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA:

Sobre la legitimación material en la causa por pasiva es necesario recordar que el Consejo de Estado señaló lo siguiente:

“(...) Resulta requisito indispensable y necesario para que pueda entrabarse la relación procesal que en la demanda se precise además de la parte demandante, la parte demandada y su representante, y en el auto admisorio se ordene su notificación y no es suficiente, a la luz de las normas citadas la precisión del acto o actos demandados y de las autoridades que las expidieron, pues es necesario identificar debidamente la parte demandada, la cual debe tener capacidad para ser sujeto procesal y ser su representante (□)□ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1989.

El mismo Consejo de Estado, ha manifestado:

“(... La Nación es una sola y cuando su responsabilidad por la prestación de un servicio público o el ejercicio de una potestad, y éste es prestado por dos entes diferentes - sin distinción en aspectos temporales o espaciales -, sólo podrá actuar como representante judicial de la Nación un sólo apoderado puesto que de conformidad con el artículo 66 del C. P. C., modificado por el artículo 1º. Numeral 24 del decreto extraordinario 2282 de 1989, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del C.C.A., se establece en forma omnicompreensiva y sin excepciones que en “ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona” y que si se confiere poder a varios, el primero será el principal y los posteriores sustitutos en su orden. Porque de lo contrario se atenta contra el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política (...). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No.10.367, sentencia del 6 de agosto de 1997 (Subrayado y negrilla fuera de texto).

LA FUNCIÓN DE SALVAGUARDAR EL ORDEN PÚBLICO NO ESTÁ A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

En materia de orden público, entendido como función de garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía, es a la Policía y al Ejército Nacional como entes del Ministerio de Defensa, a quien les corresponde su control, de tal manera que el artículo 217 y 218 de la Constitución Política establece que a tales organismos les está encomendado, respectivamente, (1) la defensa del orden constitucional y (2) el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz.

Sin duda, aunque la Nación es una sola, para efectos de atribución de responsabilidad concreta se debe verificar, sin excusa, a cuál de las entidades demandadas se le imputa el deber legal de protección, defensa y seguridad, es decir, el deber de garante del derecho conculcado. Y como ya se indicó las medidas de defensa y seguridad, además de la ejecución de las mismas, están a cargo del Ministerio de Defensa, y sus entes, entre ellos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Lo anterior, en consonancia con lo señalado en la Constitución Política Nacional y el Decreto 049 de 2003 que en su artículo primero incluye dentro de la estructura del Ministerio de Defensa a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, siendo así tales organismos parte integrante y esencial del ministerio, lo cual, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1512 de 2000 *“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”* tiene como una de las funciones esenciales:

“(…) Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

(…)”.

Con base en lo expuesto en la demanda y de acuerdo con las competencias asignadas al Municipio de Villa Rica Cauca por la Constitución Política y la ley, está claro que dentro del presente proceso esta entidad cuenta con el **presupuesto excepcional falta de legitimación material en la causa por pasiva** y por ende al no existir tal legitimación, no se cumple la condición necesaria de dictar sentencia desfavorable a los intereses de la Entidad Territorial.

Por lo expuesto tenemos que no se logra demostrar que el Municipio de Villa Rica Cauca no tiene ninguna competencia atribuida por la Constitución Política o la ley que permita imputarle el daño sufrido por los demandantes ante los perjuicios ocasionados por los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**.

En el caso sub judice no se logra probar, ni se hace un juicio de valor que permita imputar algún grado de responsabilidad administrativa y patrimonial en contra del Municipio de Villa Rica Cauca que indique que debe ser mantenido como sujeto procesal como parte demandada dentro del expediente. **En este orden de ideas, las competencias atribuidas por la ley en materia de diseño e implementación de políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos y preservación del orden público, es como su nombre lo indica, de carácter político administrativo y no de carácter operativo.** Para un mejor entendimiento del despacho, se explica que la competencia de diseño de políticas públicas para la prevención, respeto y garantía de los derechos humanos se realiza con el fin de que las entidades del Estado encargadas de proteger real y efectivamente los derechos humanos, puedan ejercer su labor de manera más organizada, eficiente y garantista. Concordante con lo anterior, el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, conservar el orden público en el municipio, de

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República.

Como se puede observar la falta del nexo causal obedece a que el presunto hecho se presentó, no como consecuencia de la falla en el servicio del Municipio de Villa Rica Cauca, sino como una negligencia, impericia, deber de cuidado del propio Estado, quien asumió el control absoluto del orden público y en este sentido los burgomaestres regionales y locales estaban supeditados a las directrices del gobierno nacional, tal como aconteció con la expedición del Decreto 575 de fecha 28 de mayo de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, en virtud del cual el Presidente de la República dio inicio a la asistencia militar previsto en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, aunque posteriormente el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta encontró que ese Acto Administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores de orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares. Expuso que si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave del orden público, lo cierto es que, en esos casos, lo que resulta admisible, y con criterios de necesidad y proporcionalidad es el uso de la fuerza policial mas no militar.

Para sustentar la decisión la Sección Cuarta advirtió que en la Sentencia C-281 de 2017, la Corte Constitucional determinó que “la protesta social por si solano representa una amenaza contra el orden constitucional ni contra la soberanía nacional. Por el contrario, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por las autoridades”

A juicio de la Sala, los motivos que respaldan la activación de la asistencia militar responden a operativos de control y contención de las movilizaciones sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, intervención militar que fue declarada inconstitucional en la Sentencia C-281 de 2017, por desconocer justamente la separación orgánica y funcional entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado ordenó la suspensión transitoria del acto administrativo mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si se ajusta o no a derecho.

Aparte de ello el Gobierno Nacional en fecha 20 de mayo de 2021 instaló la Mesa Nacional de evaluación de Garantías para la protesta nacional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.

En fecha 24 de mayo de 2021, en el marco del diálogo nacional, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro lograron un “Preacuerdo” centrado en las garantías para la protesta social. Entre los elementos discutidos en el marco del preacuerdo estaban: La necesidad de limitar la intervención militar en la gestión de la protesta, el respeto de las obligaciones internacionales sobre el uso de la fuerza, el papel del ESMAD durante el desarrollo y control de la protesta social; las expresiones públicas del Gobierno Nacional frente a la protesta y las personas manifestantes; el rechazo al uso de la violencia y la necesidad de levantar los bloqueos que impiden la realización de otros derechos.

En fecha 28 de mayo de 2021, cuando se conmemoraba un mes del inicio del Paro, el Nacional expidió el Decreto 575 de 2021, mediante el cual ordena a los Gobernadores y Alcaldes “coordinar con las autoridades militares y policía del departamento la asistencia militar... de manera que el departamento, el distrito y los municipios pongan en ejecución el Decreto para afrontar y superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y convivencia”, así como “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con

la Fuerza Pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos. Como se puede apreciar el Gobierno Nacional asumió el control total del orden público y era el que daba instrucciones a las autoridades regionales y locales, entre otras, a través del Decreto 575 de 2021, aunque el 21 de octubre de 2021 ante el recurso de impugnación interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior y Defensa, el Consejo de Estado en segunda instancia consideró que la acción de tutela era improcedente al no determinar con precisión como la asistencia militar que habilita el Decreto 575 podría llegar a afectar sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado además consideró que los accionantes contaban con otros mecanismos jurídicos para la defensa de sus derechos como la acción de nulidad.

De conformidad con lo expuesto consideramos que tanto el Gobernador como los Alcaldes Distritales y Municipales en hechos acaecidos producto del Paro Nacional de de 2021, estaban supeditados a las directrices del Gobierno Nacional que asumió el control total y absoluto del orden público por grave afectación del mismo, tal como se hizo hincapié en párrafos que anteceden pero también por lo expuesto por el Apoderado de la parte convocante cuando expresa:

“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las competencias de los alcaldes para el mantenimiento del orden público son amplias, pero se encuentran subordinadas a las directrices que, en la materia, expidan los gobernadores y, en últimas, el Presidente de la República. Así, es dable sostener que, no obstante que los alcaldes, como autoridades propias y no designadas, se encuentran en el centro de la autonomía territorial (artículo 287 de la Constitución), en materia de policía administrativa no actúan como autoridades autónomas, sino como agentes jerarquizados o subordinados, de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución.¹²⁴ Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-204 de 2019, aclaró en relación con la función de mantenimiento del orden público en cabeza de los alcaldes, lo siguiente: **“Para el mantenimiento del orden público, los alcaldes, reconocidos por el artículo 315 de la Constitución, como la primera autoridad de policía en su municipio, detentan (sic) el poder de policía, mediante el cual expiden reglamentaciones generales de las** 124 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-204 de 2019. **62 libertades, por ejemplo, la libertad de circulación o el ejercicio de las libertades económicas (restricciones de circulación, horarios de funcionamiento, zonas de parqueo, sentido de las vías, etc.). También, en ejercicio de la función de policía, los alcaldes expiden licencias o permisos, por ejemplo, de ocupación del espacio público e imponen medidas protectoras y sanciones por los comportamientos contrarios al orden público. Finalmente, dirigen la actividad de la Policía en su correspondiente municipio y, por lo tanto, bajo su orden, se realizan operativos policiales para verificar el cumplimiento de las normas de convivencia, en pro de la seguridad y tranquilidad públicas y la sanidad medioambiental. De esta manera, las competencias de los alcaldes para el mantenimiento del orden público son amplias, pero se encuentran subordinadas a las directrices que, en la materia, expidan los gobernadores y, en últimas, el Presidente de la República.** (Negrilla y subrayas fuera del texto original).

En el caso puesto bajo examen, no se presenta ni el primer elemento (falla o falta en el servicio) ni el tercero (relación de causalidad de aquella con el daño causado al tercero). Precisamente, la falta del nexo causal obedece a que el presunto hecho se presentó, no como consecuencia de la falla en el servicio del Municipio de Villa Rica Cauca, sino como una negligencia, impericia, deber de cuidado del propio Estado, quien asumió el control absoluto del orden público y en este sentido los burgomaestres regionales y locales estaban supeditados a las directrices del gobierno nacional, tal como aconteció con la expedición del Decreto 575 de fecha 28 de mayo de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, en virtud del cual el Presidente de la República dio inicio a la asistencia militar previsto en el artículo 170 de

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

la Ley 1801 de 2016, aunque posteriormente el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta encontró que ese Acto Administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores de orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares. Expuso que si bien el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave del orden público, lo cierto es que, en esos casos, lo que resulta admisible, y con criterios de necesidad y proporcionalidad es el uso de la fuerza policial mas no militar.

Para sustentar la decisión la Sección Cuarta advirtió que en la Sentencia C-281 de 2017, la Corte Constitucional determinó que “la protesta social por si solano representa una amenaza contra el orden constitucional ni contra la soberanía nacional. Por el contrario, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por las autoridades”

A juicio de la Sala, los motivos que respaldan la activación de la asistencia militar responden a operativos de control y contención de las movilizaciones sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, intervención militar que fue declarada inconstitucional en la Sentencia C-281 de 2017, por desconocer justamente la separación orgánica y funcional entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado ordenó la suspensión transitoria del acto administrativo mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si se ajusta o no a derecho.

Aparte de ello el Gobierno Nacional en fecha 20 de mayo de 2021 instaló la Mesa Nacional de evaluación de Garantías para la protesta nacional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.

En fecha 24 de mayo de 2021, en el marco del diálogo nacional, el Gobierno y el Comité Nacional del Paro lograron un “Preacuerdo” centrado en las garantías para la protesta social. Entre los elementos discutidos en el marco del preacuerdo estaban: La necesidad de limitar la intervención militar en la gestión de la protesta, el respeto de las obligaciones internacionales sobre el uso de la fuerza, el papel del ESMAD durante el desarrollo y control de la protesta social; las expresiones públicas del Gobierno Nacional frente a la protesta y las personas manifestantes; el rechazo al uso de la violencia y la necesidad de levantar los bloqueos que impiden la realización de otros derechos.

En fecha 28 de mayo de 2021, cuando se conmemoraba un mes del inicio del Paro, el Nacional expidió el Decreto 575 de 2021, mediante el cual ordena a los Gobernadores y Alcaldes “coordinar con las autoridades militares y policía del departamento la asistencia militar... de manera que el departamento, el distrito y los municipios pongan en ejecución el Decreto para afrontar y superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y convivencia”, así como “adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la Fuerza Pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos. Como se puede apreciar el Gobierno Nacional asumió el control total del orden público y era el que daba instrucciones a las autoridades regionales y locales, entre otras, a través del Decreto 575 de 2021, aunque el 21 de octubre de 2021 ante el recurso de impugnación interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior y Defensa, el Consejo de Estado en segunda instancia consideró que la acción de tutela era improcedente al no determinar con precisión como la asistencia militar que habilita el Decreto 575 podría llegar a afectar sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado además consideró que los accionantes contaban con otros mecanismos jurídicos para la defensa de sus derechos como la acción de nulidad.

Así las cosas, diríamos, entonces, que se debe exonerar de cualquier tipo de responsabilidad administrativa y patrimonial a la Entidad Territorial, en primer lugar porque había una falta de legitimación en la causa por pasiva, el Municipio de Villa Rica Cauca no es sujeto de esta demanda, Medio de Control: Reparación Directa, ya que no intervino en lo absoluto en los hechos objetos de este litis, pero también porque no habría lugar, per se, al reconocimiento de daños por no existir nexo causal que vincule el hecho generador con la producción del daño, sin obviar que la actividad determinante para la producción del daño causado a la parte actora es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional, en tanto que asumieron el control absoluto del orden público y las autoridades regionales y locales estaban supeditados a las directrices que trazaba el Presidente de la República y su equipo de trabajo.

LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA

La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, las cuales ejercen el monopolio de la fuerza de manera legítima; es decir, actúan dentro de la legalidad.

Las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación.

Entre sus funciones prioritarias se encuentran las que demanda la Constitución del año 1991, tales como velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la independencia, así como velar por el mantenimiento del orden constitucional.

La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden público interno, es un cuerpo armado al igual que las Fuerzas Armadas, pero es de naturaleza civil.

Entre sus funciones principales está la del mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, el asegurar a los individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno; es decir, perseguir y capturar a los delincuentes.

Hay tres características especiales que tiene la fuerza pública para lograr un efectivo desarrollo de sus funciones:

1. La fuerza pública no es deliberante; es decir, no se puede sindicalizar, no se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus miembros no pueden sufragar mientras estén activos en el servicio y en ningún caso pueden intervenir en actividades de partidos políticos.
2. La fuerza pública está obligada a la noción de obediencia debida; es decir, los miembros de grados inferiores deben siempre obedecer las órdenes de su superior inmediato (sólo en el caso de la fuerza pública, nunca en el de los civiles); sin embargo, las órdenes que vayan en contra de los derechos humanos pueden ser alegadas por el subalterno.
3. La fuerza pública goza del fuero militar; es decir, ésta no responde ante la justicia penal ordinaria, sino que lo hace ante los tribunales militares.

De las normas resaltadas anteriormente, así como de los hechos, base de esta demanda, no se encuentra que exista relación de causalidad, entre las funciones que legalmente desarrolla el Municipio de Villa Rica Cauca y el “posible suicidio” del señor Cristian Steven Balanta Meneses, como consecuencia del denominado Paro Nacional del 2021.

En el sub lite tenemos que al no encontrarse dentro de sus funciones el control del orden público por encontrarse en cabeza del Gobierno Nacional, además de que el señalado

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPA YÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

paro fue eminentemente de inconformidad general de la ciudadanía, la Entidad Territorial no se encuentra legitimada en la causa material por pasiva para entrar a responder material ni sustancialmente de los perjuicios que la Empresa Incubadora Santander S.A., manifiesta haber sufrido como consecuencia del paro armado, máxime cuando la actividad determinante para la producción del daño causado a la parte actora es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional, en tanto que asumieron el control absoluto del orden público y las autoridades regionales y locales estaban supeditados a las directrices que trazaba el Presidente de la República y su equipo de trabajo.

Por todo lo anterior, solicito muy respetuosamente a su Señoría declarar la **FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA** en favor del Municipio de Villa Rica Cauca.

2. INEXISTENCIA DE FALLA O FALTA DE SERVICIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

Respecto la Responsabilidad del Estado por daños a la propiedad en manifestaciones, el honorable Consejo de Estado Sección Tercera en sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) con Radicación número: 08001-23-31-000-2001- 01676-01(39063) Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, señaló:

“El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CN).

*La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886 -que corresponde al citado artículo 2 CN- **concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un “asegurador general” contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática** derivada exclusivamente de la afectación de un derecho y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Se trata, pues, de una falla relativa del servicio9.*

*Imputar responsabilidad al Estado con base en disposiciones generales como la contenida en el artículo 2 CN **supondría la existencia de una obligación, en términos jurídicos, en la cual debe responder por todos los daños que sufran las personas.** Esa norma contiene un deber general, del cual, de forma abstracta o general, no pueden derivarse directamente obligaciones resarcitorias. Si no fuese así, el Estado respondería siempre que una persona le cause daño a otra, con independencia de su intervención en el hecho, lo cual constituye, evidentemente, una distorsión que aleja al juez de la Administración de los fundamentos civiles de la responsabilidad extracontractual del Estado, **para -en su lugar- ubicarlo en los predios ajenos de la responsabilidad política.***

En esta materia se requieren análisis más precisos soportados en normas destinadas a regular la responsabilidad, que impongan verdaderas obligaciones

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

resarcitorias en términos civiles, y no estén fundados en disposiciones que fueron concebidas para establecer fines relacionados con la organización del Estado. **Por tanto, las entidades públicas solo son responsables civilmente cuando con su acción u omisión causen un daño a otro** (art. 2341 CC), pues solo en esos eventos puede surgir la obligación indemnizatoria. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Es pertinente precisar que de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, los elementos para declarar la responsabilidad del Estado son dos:

- i) La existencia de un daño antijurídico, y
- ii) que ese daño antijurídico pueda ser imputado a una entidad o entidades del Estado. Dice la jurisprudencia:

“A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad:

i) El daño antijurídico, y

ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y la necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”.

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la “fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”. Consejo de Estado, Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 15932

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la atribución de la respectiva lesión; en consecuencia “la denominada imputación jurídica (*imputatio iure* o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

Al respecto, esta Sección ha sostenido que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la

concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas publicas” (Negrillas y subrayado por fuera del texto original) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

Con base en lo expuesto, se tiene que una vez se tenga demostrado la existencia del daño antijurídico, esto es que el sujeto pasivo o las víctimas no estén en el deber jurídico de soportar, se debe proceder a hacer lo que se denomina la imputación del daño antijurídico.

Esta imputación del daño supone dos etapas; una primera denominada por la jurisprudencia como imputación fáctica, consistente en realizar un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación, y una segunda denominada imputación jurídica en la cual, a través de un estudio estrictamente jurídico, se determina si la entidad demandada debe resarcir los perjuicios por la verificación de una falla, la concreción de un riesgo excepcional o la ocurrencia de un daño especial.

La doctrina especializada, ha establecido que esta visión del Consejo de Estado de manera concreta supone en realidad, no dos, sino tres elementos para la estructuración de la responsabilidad extracontractual del Estado, así:

- 1) La existencia de un daño antijurídico
- 2) La imputación del daño a un agente estatal (lo que el Consejo de Estado denomina imputación fáctica)
- 3) El fundamento del deber de reparar (que correspondería a la imputación jurídica de que trata la jurisprudencia)

Todo lo anteriormente expuesto sirve para sustentar que tanto la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como la doctrina especializada en el tema, aseveran que, en todo juicio de responsabilidad extracontractual del estado, es necesario demostrar el porqué del daño antijurídico padecido por los convocantes es atribuible fácticamente a cualquiera de sus agentes.

Dentro de los hechos y fundamentos de derecho, el apoderado del demandante no logró cumplir con los elementos necesarios para atribuir responsabilidad al Municipio de Villa Rica Cauca por los **perjuicios derivados del paro nacional**. Según el Consejo de Estado para que el juicio de imputación se haga de manera completa, es necesario que se haga un estudio de la situación fáctica en relación con las herramientas normativas (competencias y funciones legales) que permitan su atribución a determinado agente del estado, no obstante, la parte actora obvió esta obligación. En efecto tenemos que en la presente demanda el apoderado sin sustentar fáctica ni jurídicamente su dicho, afirma que quienes deben reparar el daño sufrido por los demandantes son todas las entidades demandadas. Por lo expuesto ampliamente, queda en evidencia la inexistencia de acción u omisión imputable al Municipio de Villa Rica Cauca que derive en la generación de los perjuicios que se persiguen dentro del presente proceso.

3. INEXISTENCIA DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO

Conforme a los hechos descritos por el demandante y la innegable existencia del paro nacional lo cual es un hecho de público conocimiento, el mismo no alcanza a ser del orden antijurídico, toda vez que el Gobierno Nacional actuó dentro de sus competencias en búsqueda de la solución definitiva al paro nacional presentado, el cual no fue provocado ni promovido ni desconocido por el Estado Colombiano. En el mismo sentido desde antes del inicio del paro se hizo todo lo jurídica y legalmente posible para evitarlo, eso sí respetando el Derecho Constitucional de la protesta, sin embargo, la dimensiones

que éste tomó no estaban en las predicciones ni del más optimista de los contradictores hubiese predicho las consecuencias y duración del mismo, a pesar que el Gobierno Nacional en todo momento buscó a través del dialogo y la concertación llegar a un acuerdo con los organizadores del paro, sin tener éxito en el mismo de manera pronta. Igualmente el Gobierno Nacional, al tiempo que buscaba como concertar la finalización del paro nacional a través del dialogo, siempre hizo presencia en todo el país, en la medida de sus posibilidades en cuanto el número de miembros de la fuerza pública, sin dejar abandonada la población en general, por tanto, no hay un daño antijurídico predicable respecto del Municipio de Villa Rica Cauca y de las consecuencias que al parecer se derivaron en el mismo.

4. HECHO DE UN TERCERO

Retomando lo expuesto en las pretensiones, se tiene que la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por los daños causados por los perjuicios materiales sufridos por los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**. En el asunto objeto de estudio y del presente pedido, no se deben acoger las pretensiones de la demanda, toda vez que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos, causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas.

Bajo este marco, es importante destacar que los hechos por los cuales se presentaron los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**, son ajenos al Municipio de Villa Rica Cauca, teniendo en cuenta que, como lo señala la misma parte actora, los hechos fueron perpetrados por actores sociales particulares.

Como podemos observar, estamos en el presente caso frente a las actuaciones atribuibles a terceros diferentes al Estado. Así mismo, se evidencia que no ha existido una actuación antijurídica atribuible a la administración en la producción del daño.

Considerando lo anteriormente expuesto, se observa que existió lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado el hecho de un tercero, al respecto se ha pronunciado el Consejo de Estado:

“A la administración le es atribuible exonerarse de responsabilidad si se acredita que la causa del daño fue de manera exclusiva y determinante el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o la constitución de una fuerza mayor”².

Más precisamente sobre el hecho de un tercero se ha dicho lo siguiente:

“Se destaca en particular, para los efectos de esta providencia, que el hecho del tercero será causa extraña que exonere de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúna los siguientes requisitos:

(i) Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño existiría solidaridad entre éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le dará derecho a éste para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención.

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado.

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

(iii) *Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como advierte la doctrina – solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor*³

En el caso concreto se observa que:

i) ***Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño:*** Según lo declarado en los hechos de la demanda, las presuntas actuaciones de los participantes de los bloqueos, fueron los hechos determinantes en la causación del perjuicio

ii) ***Que el hecho de tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad:*** Acogiéndonos nuevamente a lo expuesto en los hechos de la demanda, se identifica que los actos de bloqueo de vías y disturbios en el paro nacional del 2021, fueron ejecutados por personas particulares y su Comité del Paro Nacional, ajenas a la institucionalidad.

iii) ***Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad:*** Para el Municipio de Villa Rica era imposible prever la magnitud del paro y sus consecuencias, toda vez, que este inicio en el marco de una marcha pacífica. Así mismo fue irresistible para la Entidad, toda vez que, no se encuentra en el marco funcional de esta entidad la protección de la honra y bienes privados de las personas, así como tampoco a las lesiones en su integridad personal, en otras palabras, mi mandante no tiene competencias respecto a medidas de defensa y seguridad, así como tampoco cuenta con personal de la fuerza pública. Su labor se limita como mediador entre la comunidad y el Gobierno Nacional.

PRECEDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE AL HECHO DE UN TERCERO

El honorable Consejo de Estado⁴ declaro la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero de las entidades demandadas dentro de un proceso de reparación directa en el que una sociedad comercial exigía el reconocimiento y pago de perjuicios con ocasión de unos disturbios y actos vandálicos que alteraron el orden público, así:

“Con la perspectiva de la estrecha relación entre el derecho de reunión o movilización de personas en lugares públicos y el mantenimiento del orden público (art. 2 Decreto 1355 de 1970), el precepto disponía que la autoridad de policía no debía adelantar procedimiento alguno contra las personas que acataran sus órdenes, pero facultaba a la misma autoridad para disolver el evento si degeneraba en tumulto, desorden o agitación que afectara la tranquilidad o inseguridad. Asimismo, la autoridad debía detener a quienes infringieran las normas penales o de policía, para ponerlas a disposición del funcionario competente (arts. 104 y 107). En todo caso, la policía podía impedir manifestaciones o movilizaciones que no hubieran sido anunciadas o que no cumplieran los objetivos anunciados por los organizadores (art. 105). También, debía desmovilizar a los manifestantes, si advertía que estos portaban armas o elementos con los que pudieran causar daño a los bienes públicos o a la propiedad privada y a decomisar dichos elementos, a través del ejercicio legítimo de la coerción para el restablecimiento del orden público (arts. 29 y 106). La Constitución retoma este enfoque al disponer que se garantizan solo las reuniones y manifestaciones públicas que sean pacíficas y al deferir al legislador la limitación de su ejercicio (reserva de ley).

El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

tercero sea completamente ajeno a la administración y que su acción sea **imprevisible e irresistible**.

El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. **La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible.** Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. **El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración.**

Conforme a las pruebas, el 31 de agosto de 1999 hubo un paro cívico de gran magnitud en la ciudad de Barranquilla en el que se presentaron bloqueos de vías, quema de objetos e incluso el uso de armas de fuego. Una turba de por lo menos mil manifestantes vandalizó y saqueó la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. y de otros locales comerciales. Durante los disturbios las autoridades intervinieron en la medida de sus posibilidades con tanquetas y rescataron en dos ocasiones al personal que estaba atrapado en la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. Sin embargo, las protestas fueron de tal magnitud que el Ejército, última instancia en estas situaciones, tuvo que intervenir para restaurar el orden público en la ciudad.

La Policía Nacional sabía de las manifestaciones y estuvo presente en las zonas de la ciudad que iban a ser afectadas por el paro. Inicialmente, para garantizar el derecho de reunión o movilización y el mantenimiento del orden público. Cuando advirtió que algunos manifestantes portaban armas o elementos para causar daño a los bienes públicos y a la propiedad privada, intentó dispersar la movilización con tanquetas.

Las autoridades anticiparon aquellas situaciones que normalmente ocurren en las manifestaciones, no era posible prever que una manifestación -que debía ser pacífica y cuyo fin era reclamar por la deficiente prestación de los servicios públicos- terminaría con el saqueo y la quema de la sede de Arquiglass del Caribe Ltda., empresa que -además- no estaba relacionada con el motivo de la protesta. La magnitud de los actos vandálicos, la desproporción de la multitud de personas que participó en ellos, el uso de armas de fuego y otros elementos con alto poder de destrucción y la intención de dañar la propiedad privada del sector de forma indiscriminada, eran hechos imprevisibles para las autoridades, dentro del desarrollo normal y habitual de una manifestación.

La conducta de la turba de manifestantes tampoco podía ser resistida por las autoridades, pues la cantidad de personas que participaron en estos actos y las acciones violentas que emprendieron no eran propias de una manifestación pacífica, sino de una asonada que se salió de control. Los medios que tenía la Policía Nacional a su disposición impedían concentrar la totalidad de la acción defensiva en un solo establecimiento de comercio, circunstancia que limitaba la capacidad de acción para repeler este ataque. La Policía Nacional hizo presencia en la bodega en reiteradas ocasiones e intentó dispersar la multitud con tanquetas. Sin embargo, el ataque fue tan desproporcionado que, para controlar a los manifestantes, el Ejército Nacional tuvo que hacer presencia en la zona.

No debe perderse de vista que en estos eventos debe juzgarse la posibilidad de resistir las acciones violentas, de acuerdo con la capacidad operativa y los medios de los que dispone el Estado. **En materia de mantenimiento del orden público, esa capacidad debe ser valorada según la magnitud de las alteraciones que se presentan en determinado momento y los medios disponibles para su restablecimiento, para establecer si el Estado podía hacerle frente.**

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Como el ataque a la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. no podía ser previsto por la Policía Nacional y **tampoco podía ser resistido, se configuró el hecho de un tercero***. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, el presente instructivo carece de fundamento jurídico si se tiene en cuenta que el hecho dañoso es atribuible única y **exclusivamente a terceros**, en este caso al tercero generador de los bloqueos de vías, cuya demostración corresponde a la parte demandante. Al encontrarse demostrado que los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021** se originó en el actuar de un tercero, en esta ocasión señala lo participantes de las protestas, descarta la acción como elemento de imputación frente al Municipio de Villa Rica Cauca; máxime si se tiene entonces que fueron personas totalmente ajenas al actuar del Estado y su administración las que causaron o propiciaron dichas conductas contravencionales.

En el caso sub judice, tenemos que la muerte del señor Cristian Steven Balanta Meneses se produjo al parecer por un suicidio, pero no se tiene la certeza real y fáctica de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y motivos determinantes que condujeron a ello, contrario sensu, de lo que expresa la Parte Demandante de que al parecer el deceso del señor Christian Steven Balanta Meneses, posiblemente fue como consecuencia de las acciones que le infringió tanto la Policía Nacional como el Esmad y para ello se allega una carta (en la cual habrá que probar si efectivamente corresponde a su puño y letra) que dicho señor le escribe a sus padres en las que les hacía notar que por su estado de depresión que se encontraba iba a tomar una decisión fatal, pero en ninguna parte de las líneas transcritas se evidencia que comprometa la responsabilidad de las Entidades demandadas, menos aún del Municipio de Villa Rica Cauca, como tampoco se evidencia la relación de causalidad que existiera entre su estado de salud con lo que le aconteció al parecer por las secuelas que le dejó las acciones policiales como producto de las movilizaciones que se desarrollaron por el paro nacional. Para ser más precisos, no hay prueba legalmente producida en grado de certeza que demuestre, per se, que la causa eficiente o determinante del “suicidio” del señor Christian Steven Balanta Meneses fue como consecuencia de las acciones de las entidades demandadas, en especial, de la Policía Nacional, como de Agentes del Smad que se llevaron a cabo en fecha primero (1º) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Con lo anterior, queremos significar que no hay relación de causalidad entre los hechos del 1º de mayo de 2021 y la probable causa de la muerte del señor Christian Steven Balanta Meneses que al parecer fue un “Suicidio”, es decir, no hay prueba alguna de que un hecho (lo ocurrido en fecha 1º de mayo de 2021) haya llevado a otro hecho (posible deceso por suicidio en fecha 25 de mayo de 2022), o sea, para ser más preciso, si bien, al parecer, hay indicios serios y fundados de lo ocurrido en la Movilización Nacional de fecha 1º de mayo de 2021 en donde para tratar de apaciguar la protesta legítima hizo uso desmedido de la fuerza policial, no sucede lo mismo con el hecho determinante de la muerte del señor Christian Steven Balanta Meneses que según el dictamen forense no hace mención en lo absoluto que la causa de la muerte sea producto de un suicidio (Paciente quien presenta cuadro hipotensión progresiva con actividad eléctrica sin pulso y asistolia, se declara hora de muerte a las 23:08 horas. Se solicita necropsiamédico legal por tratarse de muerte violenta), que éste haya sido como consecuencia de las acciones de la Policía Nacional y el Smad, pero bajo ninguna circunstancia del Municipio de Villa Rica Cauca.

5. INNOMINADA O GENÉRICA

Solicito al Señor Juez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso- CGP, en concordancia con el artículo 306 del C de P.C, y 187 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, se sirva reconocer las excepciones que se llegaren a encontrar probadas, aunque no hubieren sido alegadas expresamente.

Por lo expuesto en los acápites precedentes solicito comedidamente se tengan en cuenta los anteriores planteamientos para declarar probadas las excepciones propuestas y/o en su defecto, se denieguen las súplicas de la demanda.

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danip623@yahoo.es fernanp23@yahoo.es
 3218172984 3218172984
ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

XI. PRETENSIONES.

De manera comedida solicito a su Honorable Despacho, se acceda a las siguientes pretensiones:

1. Se declare la prosperidad de las excepciones de fondo propuestas por el MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA.
2. Se exonere de toda responsabilidad administrativa y patrimonial al MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA, por los daños materiales e inmateriales que se invocan en la presente acción.
3. Se condene en costas y agencias en derecho a la parte actora.
4. Se me reconozca personería jurídica para actuar dentro del presente proceso

XII. ANEXOS

- Poder debidamente conferido por la doctora María Edis Dinas, Alcaldesa del Municipio de Villa Rica Cauca.
- Acta de posesión de la Señora Alcaldesa del Municipio de Villa Rica Cauca, doctora María Edis Dinas.
- Credencial de la doctora María Edis Dinas que la acredita como Alcaldesa del Municipio de Villa Rica Cauca

XIII. NOTIFICACIONES

- El Municipio de Villa Rica Cauca, Centro Administrativo Municipal (CAM) calle 2 No. 1 – 187 del Municipio de Villa Rica Cauca.
- El suscrito apoderado recibo notificaciones en la Secretaría del Juzgado o en la calle 1ª No. 7 – 14, Oficina 211 del Edificio El Prado, Celular No. 3218172984.

XIV. TRASLADO A LOS SUJETOS PROCESALES

- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co
- **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL:**
Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co
- **LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL:**
segen.tac@policia.gov.co
- **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR:**
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
- **LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE:**
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danip23@yahoo.es fernanp23@yahoo.es
3218172984 3218172984

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

- **LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL:**

notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co

- **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:**

njudiciales@valledelcauca.gov.co

- **DEPARTAMENTO DEL CAUCA:**

notificaciones@cauca.gov.co

- **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI:**

notificacionesjudiciales@cali.gov.co

- **DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA:**

notificaciones_judiciales@buenaventura.gov.co;
dir_juridico@buenaventura.gov.co

- **MUNICIPIO DE BUGA:**

notificaciones@buga.gov.co

- **MUNICIPIO DE JAMUNDÍ:**

notificacionjudicial@jamundi.gov.co

- **MUNICIPIO DE DAGUA:**

contactenos@dagua-valle.gov.co

- **MUNICIPIO DE RESTREPO:**

juridica@restrepo-valle.gov.co

- **MUNICIPIO DE YOTOCO:**

notificacionjudicial@yotoco-valle.gov.co

- **MUNICIPIO DE CALOTO:**

juridica@caloto-cauca.gov.co

- **MUNICIPIO DE GUACHENÉ:**

notificacionesjudiciales@quachenecauca.gov.co

- **MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA:**

notificacionesjudiciales@puertotejada.gov.co

- **MINISTERIO PÚBLICO:**

PARRA TOBAR & ASOCIADOS
DANILO PARRA TOBAR FERNANDO PARRA TOBAR
Danip623@yahoo.es fernandp23@yahoo.es
3218172984 3218172984

ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
CALLE 1ª No. 7 – 14, OFICINA 211, EDIFICIO EL PRADO
TELÉFONO: 0928332073. TELÉFAX: 0928332071
POPAYÁN – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA
CALLE 9ª No. 42 – 130, APARTAMENTO 503
SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – REPÚBLICA DE COLOMBIA

luforero@procuraduria.gov.co

- **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO:**

procesosnacionales@procesosnacionales.gov.co

De la Señora Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca –
 Sección Tercera – Sub Sección A,

Atentamente,

DANILO PARRA TOBAR

*ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES, EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y
 EN DERECHO ADMINISTRATIVO. MAGISTER EN DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, DIPLOMADO EN ALTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA – UNIVERSIDAD
 SAN BUENAVENTURA DE CALI, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
 MONTERREY MÉXICO.*